

PUNTO DE VISTA

Cuando el Estado se sirve a sí mismo



—por Gonzalo Said—

La reciente auditoría de la Contraloría General de la República expuso una realidad que no puede dejarnos indiferentes: entre enero de 2021 y junio de 2023, más de 25 mil funcionarios públicos realizaron más de 59 mil salidas o ingresos al país mientras estaban con licencia médica. No es una excepción. Es la expresión de un problema más profundo y extendido: un aparato estatal que ha dejado de exigir responsabilidad ha debilitado sus controles y ha perdido de vista su razón de ser.

El ausentismo laboral en el sector público se disparó tras la pandemia. En 2023, alcanzó un promedio de 31,8 días por funcionario, más del doble que en el sector privado. No hablamos de un fenómeno exclusivamente sanitario, sino de un sistema que permite abusos sin consecuencias. Licencias médicas que se transforman en permisos para vacacionar o trabajar en paralelo. Médicos que, estando “enfermos”, siguen operando en clínicas privadas. Funcionarios que interrumpen su función pública sin mayores sanciones, mientras miles de chilenos esperan durante meses una atención, una cirugía, una solución.

Esto no es solo un problema de eficiencia. Es, por sobre todo, un problema de legitimidad. ¿A quién sirve hoy el Estado chileno? ¿A los ciudadanos que lo financian con sus impuestos o a una burocracia que, en ciertos casos, ha perdido el sentido de su rol? ¿Estamos frente a un sistema orientado a resolver los problemas de las personas, o ante un aparato cada vez más encerrado en

su propia inercia, muchas veces capturado por intereses internos?

No se trata de demonizar al conjunto de funcionarios públicos. Sería profundamente injusto. En todos los servicios hay personas que trabajan con vocación, compromiso y profesionalismo. Pero justamente por ellos y por los millones de chilenos que esperan más del Estado, es necesario denunciar con claridad lo que no está funcionando. El Estado chileno opera con reglas obsoletas, estructuras rígidas y mecanismos de control que hoy resultan ineficaces. En ese contexto, el abuso se vuelve costumbre, y la impunidad, norma. Y lo más grave: nadie parece responder.

Mientras se multiplican las irregularidades, el gasto público sigue creciendo. En 2006, representaba el 18,8% del PIB. En 2023, llegó al 27,4%. ¿Y qué hemos ganado a cambio? ¿Servicios más oportunos, más eficientes, más cercanos? No. Lo que hemos visto es una creciente frustración, una extendida percepción de que “todo sigue igual”. Cuando los ciudadanos sienten que sus esfuerzos no se traducen en un mejor país, la democracia se debilita.

Modernizar el Estado no es un lujo. Es una urgencia. No podemos seguir operando con un estatuto administrativo que impide evaluar con rigor, distinguir desempeños, premiar el mérito o corregir con agilidad las faltas graves. Necesitamos tecnología para fiscalizar, establecer métricas exigentes y construir una nueva cultura del servicio público.

Vicepresidente de la Sofofa.